

María Rey Juego de escaños

Relato del divorcio entre política y ciudadanía

María Rey Juego de escaños

Relato del divorcio entre política y ciudadanía

© María Rey, 2017

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

Primera edición: mayo de 2017

© de esta edición: Grup Editorial 62, S.L.U., 2017 Ediciones Península, Avda. Diagonal 662-664 08034 Barcelona edicionespeninsula@planeta.es www.edicionespeninsula.com

> víctor igual, s. l. - fotocomposición cayfosa - impresión depósito legal: B-6.966-2017 isbn: 978-84-9942-607-5

ÍNDICE

Introducción	9
PRIMERA PARTE: 300 DÍAS QUE CAMBIARON	
LA POLÍTICA ESPAÑOLA	
Todo empezó en Sol	13
Y en Sol se consolidó	19
De Sol al Parlamento: llega el cambio	29
De la mesa del Congreso al gallinero	37
Sesión de investidura con bebé en los escaños	43
Rondas en La Zarzuela y negociaciones en directo	47
Del baile político al «pedaleo» periodístico	53
La legislatura más corta y más bronca	59
Vuelta a la casilla de salida: la urna	71
El PSOE frente al abismo	79
Ni tan nueva, ni tan vieja política	87
segunda parte: el parlamento se quedó viejo	
La revolución pendiente	101
Del telegrama al tuit	105
El discurso se quedó viejo	III

123
135
139
145
151
161
173
185

TODO EMPEZÓ EN SOL...

La indignación contra la clase política se cocinó en la madrileña Puerta del Sol, a menos de diez minutos caminando en línea recta desde el Congreso de los Diputados. No hablamos de la primavera de 2011, sino de mucho antes, del inicio del verano de 2004. España intentaba asimilar el horror de las bombas del 11 de marzo, un atentado que había marcado las elecciones generales que se celebraron tres días después, profundizando la brecha entre los dos principales partidos políticos.

El Congreso arrancó, no sin dificultades, una comisión de investigación que debería haber ayudado a esclarecer los errores y desidias que favorecieron la masacre. Desde el primer momento se mostraron las debilidades de una comisión partida en dos, los diputados del Partido Popular dolidos por acusaciones demasiadas veces injustas y por haber perdido el Gobierno desde una mayoría absoluta que creían robusta. Enfrente el PSOE, todavía sin digerir el cúmulo de circunstancias que lo empujaron al poder, y el resto de los partidos ayudando a los socialistas a pasar factura a la pétrea figura de Aznar.

Con este telón de fondo era casi imposible que la comisión de investigación hiciese lo que le tocaba: investigar, profundizar, analizar. Enseguida se convirtió en el escenario de una batalla política que poco tenía que ver con el duelo de las familias de las 192 personas muertas en los atentados.

JUEGO DE ESCAÑOS

Esas víctimas se presentaron ante la puerta del Congreso para exigir que se les permitiese estar presentes en la comisión. Recogieron firmas —12.500— para apoyar su petición. Los papeles con sus nombres siguieron como tantas otras veces «el cauce reglamentario», el del olvido. Las normas de seguridad no permiten concentraciones en el perímetro más cercano al Congreso, así que las víctimas fueron desalojadas y se instalaron en la Puerta del Sol. Allí maduraron su indignación por la forma en que estaba trabajando la comisión de investigación, molestos por el tono de «ajuste de cuentas político» que dominaba aquellas reuniones.

No usaron pancartas, ni megáfonos, solo sentimientos. Cuando en sus últimos días de trabajo la comisión de investigación decidió convocar a los afectados, el grupo que había creado la Asociación de Víctimas del 11M se sentó a discutir cómo y qué diría ante los diputados. El periodista Aníbal Malvar, en su artículo del suplemento «Crónica», describe al detalle cómo se cocinó aquel discurso que conmovió a España.

Recogiendo testimonios de unos y otros, fueron tejiendo un documento que Pilar Manjón, recién elegida presidenta de la asociación, leería ante sus señorías. Después del impacto provocado por sus palabras y por su persona, muchos acusarían a Manjón por haber sido dirigida desde organizaciones políticas de izquierda. El detallado relato de Aníbal Malvar lo desmiente de manera lúcida. Al menos en aquel momento, no hubo en las palabras de Manjón nada más que una explosión del dolor más grande del mundo, el de una madre que ha perdido un hijo y el de muchas otras familias amputadas por las bombas en los trenes.

El 15 de diciembre de 2004, aquella mujer con aspecto frágil, con dificultades para mantener un tono de voz audible

1. «El golpe del 15D», El Mundo, 19 de diciembre de 2004.

sin perder la compostura, leyó su discurso durante una hora y 36 minutos. «Hoy hablamos, señorías, de cosas largamente meditadas.» Así arrancaban sus palabras cargadas de reproches hacia los políticos y la prensa, a quienes las víctimas acusaban, nada más y nada menos, de falta de sensibilidad ante el atentado más grave de nuestra historia. Hubo palabras duras: «Ustedes han hablado de circunloquios y periferias. Han hablado de ustedes. De nosotros, no. Esta comisión debía ser de toda la ciudadanía y ustedes se han apropiado de ella para hacer política de patio de colegio». Los diputados miraban atónitos, inmóviles, desconcertados.

Pilar Manjón los reprendió por no haberlos tenido en cuenta, por no haber hablado del sufrimiento que les produjeron los fallos de coordinación en las primeras horas tras el atentado. Les echó en cara que no les preocupasen sus problemas con el sistema público de salud. Se sentían desatendidos y perdidos en las listas de espera, mientras su angustia los devoraba por dentro. Se quejaron por la falta de pudor de los medios que mostraban una y otra vez los trenes destrozados con mantas cubriendo cuerpos, mientras ellos, desde sus casas, intentaban descubrir en aquellos bultos algún rasgo familiar. Lamentaron que no se respetara su intimidad porque constantemente recibían llamadas de organismos públicos y privados ofreciéndoles servicios, sin que nadie les hubiera pedido permiso para ceder sus datos.

Pilar Manjón riñó, sí, riñó a los diputados por empeñarse solo en saber qué había ocurrido entre el 11 —día del atentado— y el 14 de marzo —el de las elecciones—. Y les explicó lo más importante que había pasado en aquellas horas: que decenas de familias seguían buscando a los suyos, otros los enterraban y todos los lloraban.

El momento más duro de la comparecencia fue cuando la presidenta de la asociación lamentó el tono que había ido adquiriendo el debate, cada vez que alguno de los comparecientes alimentaba los argumentos de un bando o del otro. Un ambiente que ella comparó con el de «un partido de fútbol» y con la voz entrecortada preguntó a sus señorías: «¿De qué se reían, qué jaleaban?». Un silencio incómodo recorrió la sala.

Ni Pilar Manjón ni sus compañeros de duelo fueron capaces de medir el impacto que aquel discurso tendría en la sociedad y en la política. En las siguientes horas, las llamadas colapsaron el teléfono de la asociación y el móvil de su presidenta. Una de aquellas llamadas que tardó horas en atender era del Rey Juan Carlos.

Durante la hora y media de intervención pasó algo en aquella sala que en seis meses de discusiones en torno al drama del 11M todavía no había ocurrido. Casi todos los presentes lloramos. Por pena, por vergüenza o por no saber si —cada uno en su papel— había estado a la altura de las circunstancias.

En los grandes acontecimientos es donde se mide la grandeza de la política y del periodismo. No hay peor fracaso que la vergüenza. La sentimos en aquel mismo lugar tres semanas antes de escuchar a Manjón, con otro testimonio emocionante. Las palabras de un general de la Guardia Civil —Pedro Laguna— abrumado por el durísimo discurso del diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, que indirectamente lo responsabilizaba de no haber evitado la masacre. El exjefe de la Guardia Civil de Asturias, donde se habían robado los explosivos que destruyeron los trenes, leyó entre lágrimas un texto defendiendo la tarea de sus agentes y abandonó la sala despacio, empequeñecido, sin poder contener las lágrimas.

Aquellas escenas, casi olvidadas, fueron un aviso de cómo la política y la calle hablaban y sentían distinto. La prioridad de aquella comisión de investigación no fue solo descubrir lo que había pasado para evitar así que volviese a ocurrir. No para todos. La rivalidad política, el ajuste de cuentas, condicionó la mayoría de las jornadas de trabajo que sirvieron para alimentar la bronca política.

TODO EMPEZÓ EN SOL...

La vida, la presión social y el dolor convirtieron a Pilar Manjón en una figura pública controvertida. Pero volver a escuchar aquel primer discurso completo es recuperar la larga lista de reclamaciones de un grupo de ciudadanos indignados. Los primeros. Luego vinieron otros con inquietudes menos irreversibles pero también dolorosas y otras voces, no tan quebradas, pero también reivindicativas.

Pasaron los años y el desgaste de la imagen pública continuó avanzando a paso lento. Las encuestas y los análisis indicaban que ocurría lo mismo en la mayoría de los países de nuestro entorno, hasta en Estados Unidos. Ninguna razón para inquietarse demasiado, hasta que con el nubarrón de la crisis empezó a arreciar el temporal.

El 15 de mayo de 2011 el movimiento de los indignados que se había ido fraguando a través de las redes ocupó las plazas en más de 50 ciudades españolas. En la Puerta del Sol, la protesta desembocó en una acampada que comenzó de forma espontánea y consiguió mucha más repercusión de la imaginada.

Cuatro días después el periódico *The Washington Post* dedicaba la parte principal de su portada a una fotografía de la concentración del 15M. El título: «Una primavera de frustración en España». En el texto comparaba el movimiento con la Primavera Árabe. El mundo observaba a España con curiosidad.

Los indignados siguieron acampados hasta el mes de agosto, cuando fueron desalojados aprovechando el despiste veraniego. Pero el movimiento ya había fraguado; se estaba organizando. Se había abierto un debate sobre la gestión de lo público, sobre el modelo político que reclamaba una parte de la ciudadanía. Fuera de la plaza continuaron las asambleas, debates y movilizaciones. Entre la masa de quienes protestaban

sobresalieron las voces de quienes llevaban años rumiando un cambio en el enfoque político de la izquierda. Personas desencantadas con la trayectoria del PSOE o de IU, huérfanas de liderazgo.

En aquellas discusiones vibrantes se reclamaba una democracia más participativa, una división real de poderes y otras medidas para mejorar la calidad del sistema democrático. Ellos mismos se definían como un movimiento para «la repolitización de la ciudadanía». No querían menos política, querían más.

El epicentro de la protesta estaba a diez minutos a pie del Congreso y a otro tanto en dirección opuesta del Senado. Dentro de ambos edificios solo unos pocos se dieron por aludidos. Para muchos parlamentarios aquello era un movimiento pasajero que tenía más que ver con la crisis económica que con la participación política. Muy pocos se asomaron a la Puerta del Sol y los que lo hicieron fueron recibidos con gritos y abucheos. A algunos la información de lo que ocurría en la plaza les llegaba a través de conocidos o incluso de sus propios hijos. Es el caso de Gaspar Llamazares.

Uno de aquellos días de la acampada, el entonces presidente del Congreso, José Bono, salió de su despacho para visitar a uno de sus hijos en su casa. El camino más corto lo obligaba a cruzar la Puerta del Sol. Los escoltas le recomendaron que diese un rodeo pero él siguió caminando en línea recta. Cuenta Bono que un grupo de concentrados empezó a increparle y él se acercó. «Os escucho si después me escucháis a mí», les dijo. Aguantó un rato el chaparrón pero el debate no avanzaba. Imposible ponerse de acuerdo porque ninguno aceptaba el papel del otro.

En un momento determinado Bono le preguntó a su interlocutor: «¿Reconoces que yo te represento constitucionalmente?». La respuesta fue tajante: «No». El presidente del Congreso dio por terminada la discusión con esta frase: «Entonces

me alegro de no representaros porque hacéis lo mismo que los enemigos de la Constitución. No concibo una protesta con megáfonos y tiendas de campaña. Eso es lo que hizo Tejero: acampar en el Congreso».

Así de abrupta era la distancia entre los que increpaban y los increpados. Lo más doloroso para los parlamentarios era escuchar aquel grito: «No nos representan». Ellos estaban allí después de cumplir escrupulosamente las reglas de la elección de representantes. Pero en la calle no se cuestionaba el sistema que les había permitido conseguir el escaño. Se ponía en duda si los valores que se defendían desde esos asientos eran los acertados. Unos hablaban con la ley en la mano y otros con la espalda vencida por la rabia.

A pesar de su fracasada experiencia sobre el terreno, Bono volvió al Congreso e hizo una reflexión con algunos compañeros. «Me han dicho que constitucionalmente no les representamos pero el problema es que socialmente, tampoco. O lo arreglamos o ganará el que más pueda.» Bono intentaba advertir sobre la magnitud de la herida. Aquello no era un problema de derechas o izquierdas. Los de fuera y los de dentro veían de forma muy distinta la sociedad. Años después, al recordar aquellos momentos, ya alejado de la política, José Bono dejaba escapar un lamento: «El Congreso no ha cambiado nada desde entonces».

Por primera vez en mucho tiempo las protestas no eran de nadie. Ni PP ni PSOE podían atribuirse la movilización de la gente, ni su defensa. Al principio le tocó roer el hueso a Rubalcaba como ministro de Interior. Tuvo que contener las iras y evitar excesos precisamente cuando la legislatura de Zapatero entraba en declive.

Cuenta el expresidente del Congreso que en aquellos días recibió una alerta del CNI: el movimiento del 15M planeaba asaltar el Congreso, llegar hasta el hemiciclo. Lo peor para Bono no era que entraran si no cómo desalojarlos. Una noche

estando en su casa de Toledo recibió una llamada del comisario del Congreso, le avisaba de que los manifestantes estaban a 200 metros. Bono volvió a su despacho y, sin encender la luz para no alertar de su presencia, acordó con Rubalcaba una actuación contundente para desalojarlos. Lo que hiciera falta sin llegar a provocar heridos. Mantiene que en aquella protesta había muchos con perfil violento que no tenían nada que ver con el 15M.

A pocas semanas de que se disolvieran las Cortes se produjo otro momento delicado. Zapatero pactó con Rajoy la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución. Para el presidente era un gesto necesario para calmar la inquietud de Europa ante la caída en picado de la economía española. España se comprometía en la máxima ley a no exceder su límite de gasto. Pero la calle lo interpretó de forma bien diferente: el bipartidismo había puesto las prioridades de Angela Merkel por encima de las necesidades de la sociedad española.

Tres meses después de aquel acuerdo in extremis, con un notable clima de tensión en la calle, se celebraron las elecciones el 20 de noviembre de 2011. Rajoy se convirtió en el presidente del Gobierno al que una mayoría indiscutible le había encargado pilotar la salida de la crisis.

Nada mejoró el ambiente, más bien lo contrario. Con el nuevo año llegó la política de recortes del Gobierno del PP. Cada vez que se anunciaba un ajuste, el Congreso se blindaba para recibir una nueva movilización de los indignados. Así transcurrieron los seis primeros meses de legislatura popular. La protección de los edificios públicos se iba reforzando poco a poco hasta que llegó el verano y el Congreso se rodeó de vallas. No eran las verjas amarillas habituales en los edificios oficiales. Estas eran más altas y tupidas, muy parecidas a los somieres de los dormitorios antiguos.

El ambiente estaba ya muy enrarecido cuando el nuevo Gobierno anunció recortes para los funcionarios: menos días libres

y sin paga de Navidad hasta nuevo aviso. Los trabajadores de la Administración respondieron con una importante manifestación de protesta y se produjeron escenas desconcertantes. Policías en los dos bandos, unos protegiendo el Congreso y otros acosándolo con pancartas. Junto a ellos, bomberos, sanitarios y otros muchos trabajadores de la función pública...

Los «somieres» llegaron para quedarse, a ratos desplegados, a ratos apilados y atados con candados. Alguien con mando había tomado la decisión de que había que asegurar la institución frente a las iras de la calle. Las vallas ayudaban a la policía en su tarea de contención de las protestas, pero también contribuían a subrayar esa imagen de aislamiento del Parlamento.

La manifestación que se celebró el 25 de septiembre de 2012 estaba autorizada, aunque con el compromiso de no moverse de la cercana plaza de Neptuno, a unos metros de la fachada de los leones. Comenzó de forma pacífica hasta que pasó la hora de los telediarios. Entonces se iniciaron las cargas policiales. Las fuerzas de seguridad querían recuperar la calma antes de que anocheciese del todo, pero las cosas se complicaron en el entorno de la estación de Atocha. Balance: 34 detenidos y 64 heridos; 27 de ellos policías.

La respuesta a la actuación policial fue convocar nuevas movilizaciones para los días posteriores. El Congreso siguió reforzando la línea de vallas. Ya no se podía circular por los alrededores sin enseñar la documentación. Las furgonetas policiales se instalaron día y noche frente a los leones. Para entonces, ser diputado ya no solo era una profesión desprestigiada; podía resultar incluso peligrosa. A pesar de ello siempre había algún intrépido. Un reportero de televisión grabó el momento en que un parlamentario apartaba una valla para cruzar por el lugar donde se concentraba una multitud vociferando. El policía intentó disuadirlo pero venció la chulería: «Paso por aquí porque me sale de los cojones, ¡solo faltaría!».

JUEGO DE ESCAÑOS

Hay que decir que aquella imagen no se emitió y no porque hubiera una orden que lo prohibiese. Fue por la preocupación de un periodista que no encontraba sentido a seguir alimentado la hoguera.

Eran días largos, en algunos momentos apasionantes pero en otros difíciles. Las protestas se solían convocar a última hora de la tarde. Nos pillaban entrando en directo en los informativos de las 21 horas. Teníamos dificultades para narrar lo que estaba ocurriendo porque las manifestaciones eran contenidas a doscientos metros de nuestras posiciones. Tampoco ayudaba el ruido ensordecedor de los helicópteros de la policía sobrevolando la zona.

Las fuerzas de seguridad seguían aquellos movimientos a través de las redes sociales, con «escuchas» que le permitían saber por dónde se acercaban los manifestantes. Hubo que reforzar la zona con unidades policiales llegadas desde toda España. Unos y otros pasamos muchas horas en la acera de la carrera de San Jerónimo expectantes, sin saber cómo iba a acabar la noche.

La tensión duró meses y las vallas, años. Cuando volvía la calma, se replegaban en alguna esquina de las calles adyacentes bien colocaditas y amarradas con cadenas, por si alguien tenía tentaciones de «apañárselas» para su dormitorio. Si el termómetro de las redes sociales subía de temperatura, se volvían a desplegar. Durante una de aquellas manifestaciones, la página de Facebook del movimiento Ocupa el Congreso difundía este mensaje: «Han tirado las vallas y empiezan las cargas policiales. Unos tiran vallas y otros tiran a personas».

Ese tipo de frases «volaban» a través de las redes sociales. El movimiento de los indignados había sumado muchas simpatías también entre los que no salieron a la calle. Con la acampada en marcha en la Puerta del Sol el diario *El País* encargó un estudio a Metroscopia que reflejó el apoyo mayoritario de la sociedad. El 66 % creía que los indignados tenían «básica-

mente razón» y el 90 % reclamaba cambios en el funcionamiento de los partidos.² En aquellos meses, otra encuesta realizada por Ipsos aportó un resultado muy similar.

El sociólogo Manuel Castells, estudioso de estos movimientos desde sus orígenes y autor del libro *Redes de indignación y esperanza*, explica con tres factores el éxito de la protesta:

- la crisis económica;
- la percepción de que el sistema estaba siendo incapaz de resolver los problemas provocados por la crisis y;
- la sensación de que los políticos estaban fracasando en su trabajo mientras seguían viviendo del dinero público.

Además, Castells añade otro elemento que define como «la arrogancia del bipartidismo». Mantiene que la actitud durante décadas de los dos grandes partidos es la que ha permitido construir nuevos liderazgos extraparlamentarios. Algo inimaginable muy pocos años antes de eso que se llegó a llamar Spanish Revolution.

De forma excepcional, algunas reclamaciones de los indignados llegaron al Parlamento. Los manifestantes elaboraron una lista de propuestas que querían llevar al Congreso. Para superar los controles, vistieron de domingo a cuatro jóvenes que subieron la carrera de San Jerónimo asegurando ante la policía que se dirigían al hotel Palace. Así llegaron hasta la misma verja de los leones y consiguieron entrar sin ninguna dificultad. Ellos mismos explicaron que se habían sentido bien tratados, que les habían facilitado el acceso al Registro, el lugar donde se oficializan los documentos.

Las peticiones de los indignados resumían lo recogido en ciudades y pueblos. Había peticiones de lo más variopintas

2. Apoyo a la indignación del 15M, barómetro de junio, *El País*, 15 de junio de 2011.

pero también razonables. Denunciaban que en un pueblo de Segovia se había construido una Casa de la Juventud pero que llevaba dos años sin ninguna actividad. O mucho peor, en Castellón había pasado lo mismo con un aeropuerto de coste millonario. Los habitantes de Moratalla, en Murcia, se quejaban de que un ayuntamiento de 8.000 habitantes arrastraba una deuda de 28 millones de euros. Allí estaba también el drama de muchos agricultores que cobraban por sus productos bastante menos de lo que les había costado cosecharlos. O las dificultades para llegar a una farmacia de guardia, un hospital o una escuela. Eran preocupaciones comunes, de las que se comentaban en los bares y con difícil solución para un Estado que rozaba la bancarrota.

Gaspar Llamazares se comprometió a trasladar aquellas peticiones de los concentrados en Sol al presidente del Gobierno. Se reunió con ellos en una cafetería y horas después entregó los papeles a Rajoy.

Esquerra Republicana pidió que se crease un grupo de trabajo para estudiar las propuestas de los indignados, pero al final tuvo que dar marcha atrás y hacer planteamientos más difusos: buscar fórmulas para profundizar en la democracia, la participación política, la transparencia y el control de las instituciones.

Sin embargo, algunas de las leyes puestas en marcha en los siguientes meses intentaron recoger ese espíritu. La ley de Transparencia, las reformas que buscaban racionalizar los gastos y combatir la duplicidad de funciones en las administraciones públicas y la que estableció que los condenados por corrupción tendrían que devolver el dinero público sustraído. Eran reformas que intentaban recuperar la confianza aunque solo desde el centro derecha lo interpretaron así.

Otras reclamaciones reiteradas una y otra vez en la calle seguían sin encontrar respuesta en el Congreso. Los indignados exigían una solución para los ciudadanos que estaban per-

diendo sus viviendas por no poder afrontar las hipotecas. Las plataformas antidesahucios habían ido ganando un espacio notable en las movilizaciones sociales y destacaba el protagonismo de una joven activista de Barcelona llamada Ada Colau. Ella puso voz a la organización que entregó cientos de miles de firmas en el Congreso para reclamar un cambio en la ley. Nos llamó la atención su habilidad para trasladar mensajes claros y directos.

Las plataformas unieron fuerzas con sindicatos y otros organizadores sociales y llegaron casi a triplicar el medio de millón de firmas necesario para que el Congreso tome en consideración una ley propuesta por el pueblo, una Iniciativa Legislativa Popular. El PP, que tenía en marcha su propia ley, se resistió hasta el último minuto a permitir que la que llegaba desde la calle fuera tramitada. Pero era tal el clamor social que en el último minuto unió su voto a favor al del resto de la Cámara.

En la tribuna se sucedían los discursos, en la calle los gritos de los manifestantes, en los escaños proliferaban camisetas naranjas con la frase «Stop desahucios» y en la tribuna, la policía desalojaba a Ada Colau y a otros activistas por sus protestas. En esas horas de tensión llegó desde Mallorca la peor noticia: un matrimonio se había quitado la vida horas después de recibir el aviso de desahucio.

Dos meses después de aquella jornada, el Gobierno de Rajoy decidió fusionar la iniciativa popular en trámite con el proyecto de ley del Gobierno. Un solo texto que se dejaba por el camino las principales reivindicaciones de las plataformas. Los promotores de la propuesta popular, que había llegado avalada por más de 1.400.000 firmas, decidieron retirarla como protesta. Otra evidencia de la distancia entre la calle y el Parlamento.

Años después, Gaspar Llamazares ya desde Asturias, su nuevo destino político, lamentaba que no se hubieran afrontado entonces los cambios que se reclamaban desde fuera. Cree

JUEGO DE ESCAÑOS

que solo se tocó «la superficie de la representación y no las bases donde se asienta». La tarea pendiente era hacer reformas profundas, esas que necesitan el debate y el pacto entre distintas fuerzas políticas y eso en la primera legislatura de Rajoy, con mayoría absoluta, no era posible.